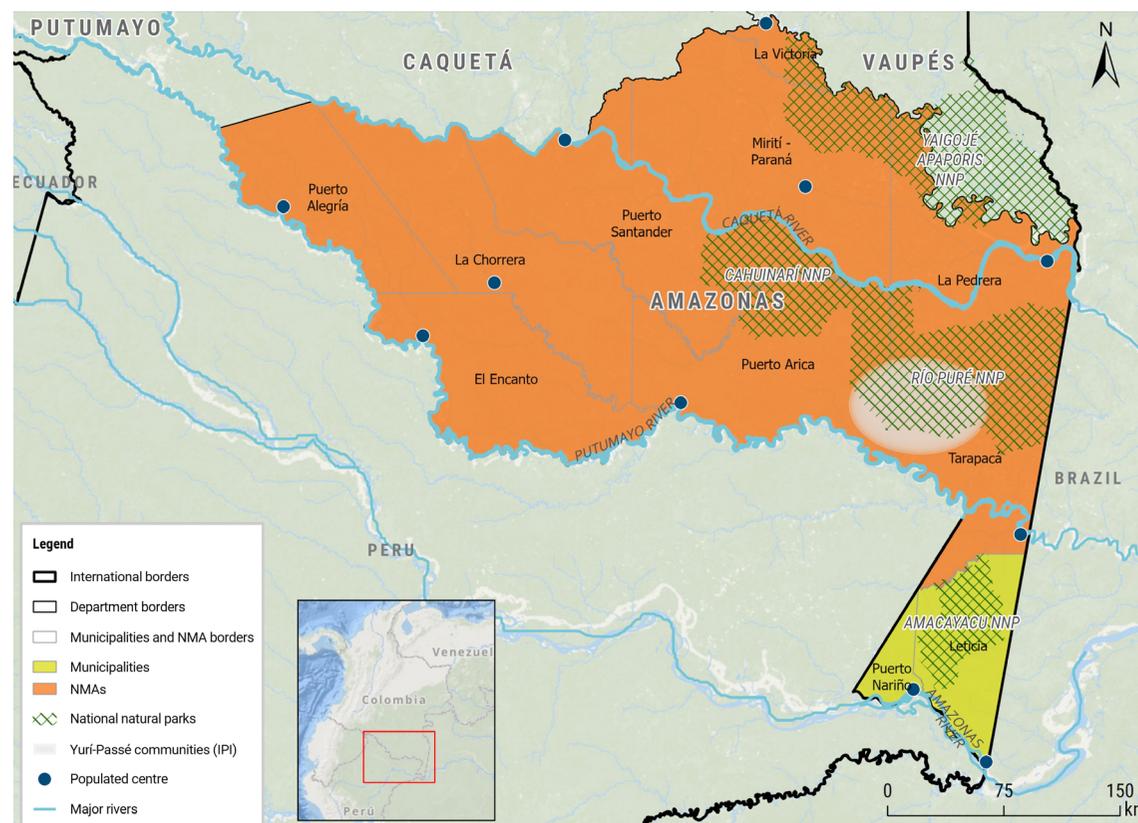


PANORAMA

La Amazonia, la selva tropical más grande del mundo, abarca aproximadamente siete millones de kilómetros cuadrados y atraviesa nueve países de Latinoamérica, incluido Colombia. En el sureste de Colombia, la selva tropical representa dos tercios del área forestal total del país, cubriendo más de 480 000 km² (EIA 26/06/2019). Esta extensa región abarca alrededor de seis departamentos, siendo el departamento del Amazonas el más grande del país, y más de la mitad de su población (51,7%), indígena. El departamento del Amazonas ha enfrentado una crisis histórica, marcada por problemas de larga data arraigados en la falta de presencia estatal. El departamento enfrenta diversos desafíos ya que presenta una infraestructura deficiente, servicios básicos limitados, un desarrollo económico insuficiente y la presencia de grupos armados no estatales y grupos transnacionales de crimen organizado. Esto ha ocasionado problemas generalizados de pobreza, exclusión, marginación y protección, como el reclutamiento, la explotación infantil, los homicidios, las amenazas, la extorsión, la violencia basada en género (VBG) y el desplazamiento forzado (iMMAP/OCHA 09/01/2024; KII 12/12/2023; DP 11/05/2023).

La relación entre el clima y el conflicto en la Amazonía colombiana se evidencia en un círculo complejo. Los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas y las alteraciones en los patrones de lluvia, afectan directamente a los medios de subsistencia, en especial los de las comunidades indígenas. Esto, a su vez, se convierte en un catalizador de conflictos en torno a la escasez de recursos, la tierra en disputa y las oportunidades económicas. Actividades como la explotación ilegal de recursos aceleran la degradación ambiental. Las prácticas económicas ilícitas vinculadas a los grupos armados no estatales y la corrupción agravan aún más las tensiones. La intrincada interacción de estos elementos crea un ciclo en el que el cambio climático desencadena conflictos, y estos, en un circuito de retroalimentación, intensifican aún más la degradación ambiental y representan una amenaza importante para la seguridad humana (GI-TOC et al. 03/11/2023; NUPI/SIPRI 31/10/2022; WWF et al. 30/09/2021).

Mapa 1. Ríos, áreas no municipalizadas (ANM) y municipios del departamento del Amazonas



Fuentes: ACAPS utiliza datos del DANE (consultado el 16/01/24); WB (consultado el 16/1/24); iMMAP (01/03/2022)

TABLA DE CONTENIDOS

Hallazgos clave.....	3
Conceptos clave	3
Descripción general del contexto	4
Causantes	5
Factores agravantes.....	8
Impactos	9
Situación humanitaria en cada eje territorial.....	11

ACERCA DE ESTE INFORME

Objetivo

Este informe tiene como objetivo explicar los elementos necesarios para entender la crisis humanitaria en el departamento colombiano del Amazonas, con un enfoque específico en las maneras como afecta a la población indígena. También presenta la situación humanitaria diferenciada para cada eje territorial dentro del departamento.

Limitaciones y vacíos de información

La crisis amazónica se caracteriza por la falta de datos cuantitativos de fuentes humanitarias no gubernamentales que respalden los numerosos testimonios y advertencias de diferentes organizaciones indígenas sobre la crisis humanitaria y su impacto en la población amazónica. Los únicos datos cuantitativos disponibles provienen del Gobierno colombiano, pero no están actualizados, y es probable que exista un subregistro, especialmente en lo que respecta a las acciones violentas que varios grupos armados no estatales perpetran contra la población. Si bien la abundancia de relatos cualitativos y el apoyo continuo arrojan luz sobre la gravedad de la situación, hay una falta de información sobre las tasas de homicidios relacionadas con el conflicto armado, el número específico de niños reclutados y los casos de VBG. La falta de datos desglosados disponibles sobre género, edad y discapacidad en Colombia dificulta comprender y abordar las necesidades y experiencias específicas de ciertos grupos de población.

Metodología

Este análisis se basa en una revisión exhaustiva de los datos secundarios, como informes y documentos de organizaciones internacionales y colombianas, así como de investigadores. Para enriquecer estos datos, entre septiembre y diciembre de 2023 se realizaron entrevistas a informantes clave con profesionales de agencias de la ONU, ONGs internacionales y organizaciones de la sociedad civil colombiana. Los entrevistados poseían una amplia gama de conocimientos, eran desde trabajadores del sector humanitario y académicos hasta personas que trabajaban directamente con las comunidades indígenas del territorio.

HALLAZGOS CLAVE

- El departamento del Amazonas enfrenta importantes desafíos relacionados con su vasta geografía, su densa selva y su población dispersa, lo que resulta en una infraestructura precaria y dificultades de acceso. La concentración de instituciones en áreas urbanas, como Leticia y Puerto Nariño, deja a las áreas no municipalizadas (ANM) sin la atención del Estado, lo que afecta la cobertura de los servicios básicos.
- El cambio climático y el fenómeno de El Niño aumentan la frecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y extremos, como inundaciones, deslizamientos de tierra, olas de calor, incendios forestales y la reducción de los caudales de los ríos, lo que afecta los medios de subsistencia, el acceso al agua y la seguridad alimentaria de la población.
- La presencia de grupos armados no estatales genera varias necesidades de protección que afectan particularmente a las comunidades indígenas, los pueblos indígenas en aislamiento (PIA), los niños y niñas, los defensores del medio ambiente y los guardaparques. Las fronteras porosas con Brasil y Perú crean dinámicas regionales complejas, lo que facilita el movimiento de los grupos criminales transnacionales.
- La débil infraestructura de salud, la violencia asociada con las actividades ilegales y los grupos armados y el acceso limitado a los servicios médicos contribuyen a la crisis de salud en el departamento. La contaminación del agua provocada por actividades como la minería ilegal provoca problemas de salud, como infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas. Estos desafíos posteriormente afectan la disponibilidad de alimentos y el acceso al agua potable, lo que contribuye a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la región.
- En la región hay altas tasas de suicidio, en particular en las comunidades indígenas, con factores asociados que incluyen la degradación de los hábitats naturales, el abuso de sustancias y la pérdida de identidad cultural.
- La infraestructura de transporte inadecuada, la violencia armada y la baja densidad de población dificultan las operaciones humanitarias y el acceso en las comunidades necesitadas.
- Las necesidades humanitarias identificadas en todos los ejes territoriales incluyen desafíos en materia de salud, agua, saneamiento e higiene (WASH por su sigla en inglés) y malnutrición aguda grave (ACH et al. 01/07/2022). Sin embargo, cada eje tiene necesidades específicas que exigen intervenciones particulares (KII 06/12/2023)
- En el eje del Caquetá, hay problemas urgentes relacionados con la navegación fluvial, el tráfico de drogas y las actividades mineras. El eje del Putumayo se enfrenta a la presencia de grupos armados no estatales, la contaminación por mercurio y el cultivo extensivo de coca. El eje del Amazonas se enfrenta a una reducción del caudal del río Amazonas, lo que afecta la movilidad y los precios de los alimentos e implica riesgos de protección, protección infantil y VBG. A futuro, es probable que estas necesidades e impactos empeoren.

CONCEPTOS CLAVE

Los **ANMs**, a diferencia de los municipios bajo jurisdicción municipal, tienen su propia administración y gobierno, supervisados por un magistrado designado por el gobierno departamental. En el Amazonas hay nueve áreas de este tipo, como El Encanto, La Chorrera, Puerto Alegría y otras, todas administradas por el gobierno departamental del Amazonas. Estas áreas enfrentan altas restricciones de acceso e incurrir en altos costos de movilidad (ACH et al. 01/07/2022).

Los **PIAs** son aquellos que, en el ejercicio de su autodeterminación, evitan cualquier contacto con sociedades externas (LEY 17/06/2021). Actualmente están sujetos a condiciones de extrema vulnerabilidad a las amenazas y al contacto (GTI-PIACI consultado el 16/01/2024).

Los **parques naturales nacionales** son áreas extensas que albergan ecosistemas representativos de la diversidad natural del país. Están protegidos dentro del territorio nacional con el objetivo de conservar la biodiversidad, los recursos naturales y el patrimonio cultural (PNNC consultado el 29/01/2024).

Las **áreas ambientalmente protegidas** son áreas definidas geográficamente que han sido designadas, reguladas y administradas para lograr objetivos de conservación específicos. Más allá de los objetivos de conservación, estas áreas también pueden cumplir funciones adicionales, como brindar beneficios educativos, recreativos o culturales (PNNC consultado el 29/01/2024).

Las **reservas forestales** son áreas forestales establecidas para la conservación de los bosques y la biodiversidad. Pueden ser de propiedad pública o privada y pueden ser administradas por el Gobierno, organizaciones privadas o comunidades locales (MADS consultado el 29/01/2024).

Eje territorial: en el departamento del Amazonas, los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo son clave para entender las dinámicas de la región. Estos ríos, vitales para el transporte, también forman límites naturales que, dada la infraestructura limitada de la región y las densas selvas, desafían la movilidad de la comunidad. Esta topografía resulta en tres ejes territoriales distintos: el eje norte del Caquetá, el eje central del Putumayo y el eje sur del Amazonas. Es importante tener en cuenta que estos ríos también tienen un significado cultural, ya que la mayoría de las personas se identifican como Yuruparí (norte), personas del centro y personas del agua (sur). Esta perspectiva facilita una comprensión más profunda y específica del Amazonas, lo que evita simplificaciones excesivas (KII 06/12/2023).

Los **proveedores de servicios de salud indígenas** son organizaciones o personas que prestan servicios de salud a las comunidades indígenas de Colombia. Los propios miembros de las comunidades indígenas dirigen y administran a estos proveedores, asegurándose de que

los servicios sean culturalmente apropiados y respondan a las necesidades específicas de cada comunidad. Estos proveedores suelen ofrecer servicios básicos de atención primaria, que incluyen consultas médicas generales, vacunación, atención médica materna e infantil y educación en salud (AIC-EPSI consultado el 17/01/2024).

Los **grupos transnacionales de crimen organizado** son redes de personas que participan en actividades ilegales a través de las fronteras nacionales. Operan con fines de lucro y utilizan la violencia, la corrupción y la intimidación para lograr sus objetivos. El crimen transnacional organizado no es estático, sino que es una industria en constante cambio que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de crimen (SIPRI 02/09/2022; RIEC 15/03/2018).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO

Tabla 1. Información de referencia sobre las estadísticas de población del departamento del Amazonas y el acceso a los servicios básicos (municipios y ANMs)

	LETICIA	PUERTO NARIÑO	ANMS	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	NACIONAL
Población (proyección 2024)	54 927	10 928	20 463	86 318	52 695 952
% de la población que vive en zonas rurales (proyección 2024)	28	60	100	49	24
% Porcentaje de grupos étnicos (2018)	Indígena = 43,67 Afrocolombiano = 1	Indígena = 96,25 Afrocolombiano = 0,37	Indígena = 90,04 Afrocolombiano = 0,73	Indígena = 86,22 Afrocolombiano = 0,69	Indígena = 14,31 Afrocolombiano = 7,5
Cobertura de agua potable rural (2018)	16,7	7,4	12,3	12,3	62,7*
% de cobertura de alcantarillado rural (2018)	1,8	0,99	8	4,9	79,8*
% de la población en condición de pobreza según el Índice de Pobreza Multidimensional (2018)	67,8	79,2	87	84,2	38,6
% de inasistencia a la escuela en zonas rurales (2018)	8,3	17,5	16	15,6	5,3
% de la población rural que enfrenta obstáculos para acceder a los servicios de salud (2018)	6,8	6,8	12	11,1	7,8
% de cobertura eléctrica en zonas rurales (2018)	83,6	78,8	30	39,1	81,39
Proporción de la población que sufre inseguridad alimentaria (2022)	-	-	-	28,4	32,5

*2022

Nota: las cifras de los indicadores de la columna ANM representan un promedio calculado de las nueve ANMs del departamento.

Fuentes: DANE (consultado 10/01/2024 a); DANE (consultado 10/01/2024 b); DANE (consultado 10/01/2024 c); DANE (consultado 29/01/2024); DANE (22/03/2023 a, 22/03/2023 b); DANE (consultado 202); ACAPS (22/12/2023).

Leticia y Puerto Nariño son los dos municipios del departamento del Amazonas, y Leticia es la capital. En la tabla 1 se destaca la falta general de disponibilidad de servicios básicos para la población rural del departamento del Amazonas (49%) en comparación con el nivel nacional (24%). Estos hallazgos coinciden con un estudio realizado por el instituto indígena Sinchi, que reportó que, a pesar de las posibles mejoras en las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad a través de los servicios públicos, solo un promedio del 17,8% de los hogares indígenas analizados en el departamento tenían servicios públicos básicos disponibles (SINCHI/MADS 2020).

A finales de 2023, las comunidades y las organizaciones humanitarias comenzaron a reportar una reducción significativa en el caudal del río Amazonas en el sur del departamento del Amazonas, agravada por los peligros climáticos y El Niño. Esta reducción pone en peligro los medios de subsistencia, ya que algunas comunidades indígenas dependen completamente de la pesca. También pone en riesgo el transporte, el acceso a alimentos y el agua potable (3iSolution/IMMAP 04/01/2024 a; 3iSolution/IMMAP 04/01/2024 b; Greenpeace 26/10/2023). La intensificación del acaparamiento de recursos y las actividades ilegales —como el tráfico de drogas y la minería ilegal por parte de varios grupos armados no estatales— contribuyen no solo a la degradación ambiental y la deforestación en la región, sino también a la escalada de violencia (KII 12/12/2023; Mongabay 14/10/2021). Estos impactos alteran de manera significativa las condiciones de vida y las relaciones de los pueblos indígenas y los campesinos con sus territorios específicos. También empeoran la crisis humanitaria, en la que el cambio climático acelerado actúa como un factor contribuyente. Las comunidades indígenas del departamento del Amazonas son las más afectadas por estos desafíos, ya que los afectan consecuencias desproporcionadas y una creciente vulnerabilidad.

CAUSANTES

Peligros climáticos

La Amazonía como departamento está expuesta a frecuentes inundaciones y sequías. En 2023, las comunidades indígenas identificaron las olas de calor, las inundaciones y las sequías como los sucesos más importantes relacionados con fenómenos naturales extremos. Las olas de calor afectan la educación de los niños y la agricultura, provocando una disminución de la productividad de los cultivos y reduciendo la disponibilidad de alimentos a corto y medio plazo. Los cambios en el nivel de los ríos, como resultado de sequías e inundaciones, obligan a los peces a ajustar sus temporadas de reproducción y migraciones, lo que altera su disponibilidad para las comunidades indígenas (KII 23/01/2024). Estos impactos se analizaron específicamente en la comunidad de El Vergel en el municipio de Leticia, compuesta por indígenas de los grupos étnicos Tikuna, Cocoma y Yagua (3iSolution/IMMAP 04/01/2024).

Presencia de grupos armados no estatales

Las redes de miles de ríos permiten a los grupos armados no estatales y a los grupos transnacionales de crimen organizado moverse libremente, protegidos de las autoridades por la densa cubierta forestal. En las fronteras porosas y difíciles de controlar, diferentes grupos armados no estatales compiten ferozmente por el dominio y la explotación de la Amazonía mientras buscan el control de los abundantes recursos de la región (InfoAmazonia 03/08/2023). Estos grupos armados no estatales operan tanto en la selva amazónica como en las prisiones de varios países fronterizos y sus actividades económicas varían, van desde el tráfico de drogas y la minería hasta la ocupación de tierras y el comercio de madera (GI-TOC et al. 03/11/2023).

Ciertos grupos armados no estatales de Colombia y Brasil tienen una larga historia de actividades en la Amazonía.

- Fundado en Colombia en la década de 1960, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se convirtió en la mayor organización guerrillera de Colombia tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016. Si bien el ELN no siempre ha estado presente en la Amazonía, ha ampliado su presencia en Venezuela, y ha utilizado las regiones fronterizas con fines estratégicos (ICG 14/12/2020). El ELN opera de manera estratégica en ambos lados de la frontera amazónica entre Colombia y Venezuela, controlando principalmente la minería ilegal de oro.
- Los disidentes de las FARC-EP surgieron de su oposición al proceso de paz en Colombia (InSight Crime 20/10/2022). En la Amazonía, grupos disidentes como La Segunda Marquetalia

y el Estado Mayor Central aprovechan el débil control y las economías ilegales disponibles para expandirse más allá de las fronteras (GI-TOC et al. 03/11/2023).

- El Primeiro Comando da Capital de Brasil, que en principio se enfocaba en el tráfico de drogas, ha expandido rápidamente su control territorial y económico. Su influencia se ha extendido hasta la Amazonía boliviana y tiene una presencia tácita en Colombia (FIU 10/2021).
- Comando Vermelho, originario de Brasil, al inicio fue una organización de tráfico de drogas, pero se ha convertido en una red criminal más amplia presente en Colombia y Paraguay.

Las drogas son transportadas por río a la zona de la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú, y también por personas que llevan mochilas por tierra para llegar a la frontera con Brasil (GI-TOC et al. 03/11/2023).

Si bien estos son los principales grupos armados, otros grupos armados no estatales emergentes y los grupos transnacionales de crimen organizado también se disputan el territorio y sus economías ilícitas (GI-TOC et al. 03/11/2023). Un ejemplo de esto es el grupo armado no estatal conocido como Los Comandos de la Frontera, que en los últimos años ha pasado de intrusiones esporádicas a una presencia más deliberada. Han establecido campamentos, reclutado a nuevos miembros y consolidado su autoridad en áreas específicas de Perú, en especial en Pacora, así como a lo largo de las regiones fronterizas de Ecuador (GI-TOC et al. 03/11/2023; EE 14/03/2024). Con la pandemia de COVID-19, los países cerraron sus fronteras, pero las empresas criminales —que no estaban restringidas por las fronteras internacionales— aumentaron su control a medida que los gobiernos limitaban sus acciones en la Amazonía. Las áreas remotas, en particular las cercanas a las fronteras, se han transformado en zonas donde estas redes convergen, participan en el comercio ilícito, intensifican los conflictos, cruzan las fronteras para evadir la aplicación de la ley y expanden sus operaciones económicas ilegales (InfoAmazonia 03/08/2023).

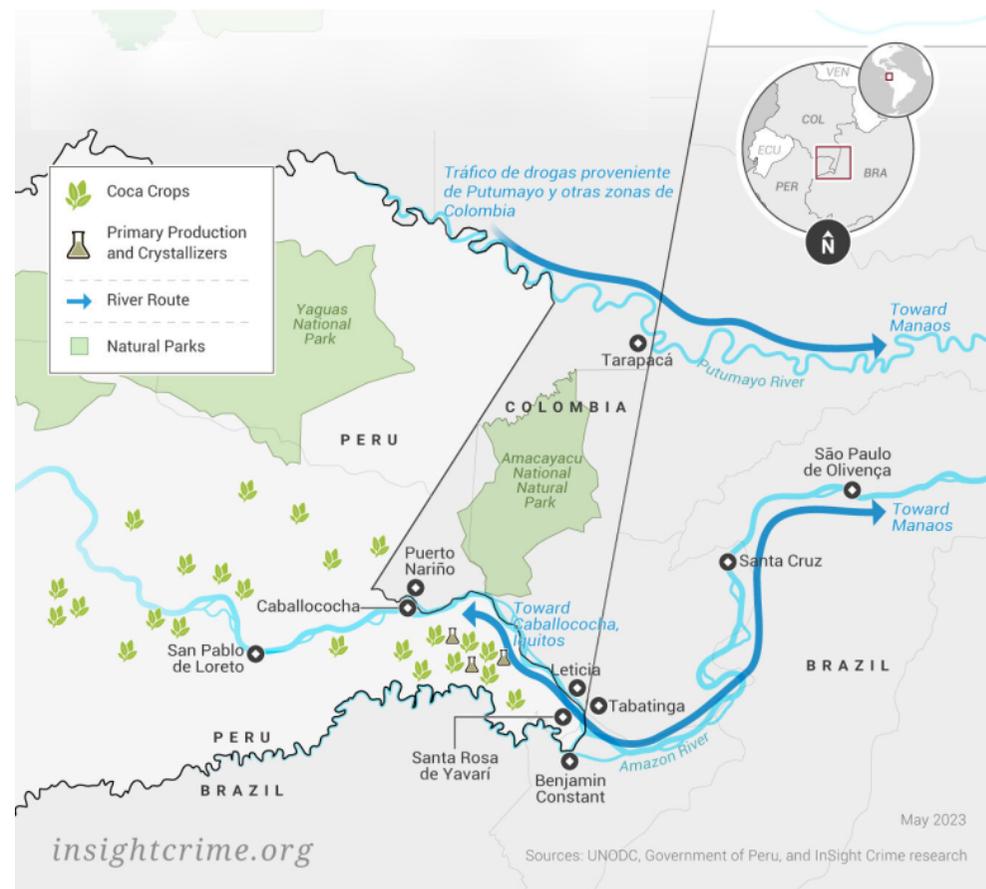
Economías ilegales

En la Amazonía, varios factores, como la falta de infraestructura, servicios básicos, educación y desarrollo económico, han creado un entorno en el que prevalecen la pobreza, la exclusión y la marginación. En esta situación, las actividades económicas informales e ilícitas tienden a convertirse en el principal medio de subsistencia de la población (KII 27/12/2023). Si bien actividades como la minería ilegal y la deforestación han existido durante muchos años, factores externos, como la pandemia y el aumento de la demanda mundial, han impulsado su crecimiento. Las economías ilícitas como el tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro

convergen cada vez más, lo que ha hecho que la línea entre los negocios legales e ilegales y, a veces, entre los grupos armados estatales y no estatales, se haya vuelto borrosa (GI-TOC et al. 03/11/2023).

Tráfico de drogas

Mapa 2. Rutas del narcotráfico en la zona de la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú



Fuente: InSight Crime (08/08/2023)

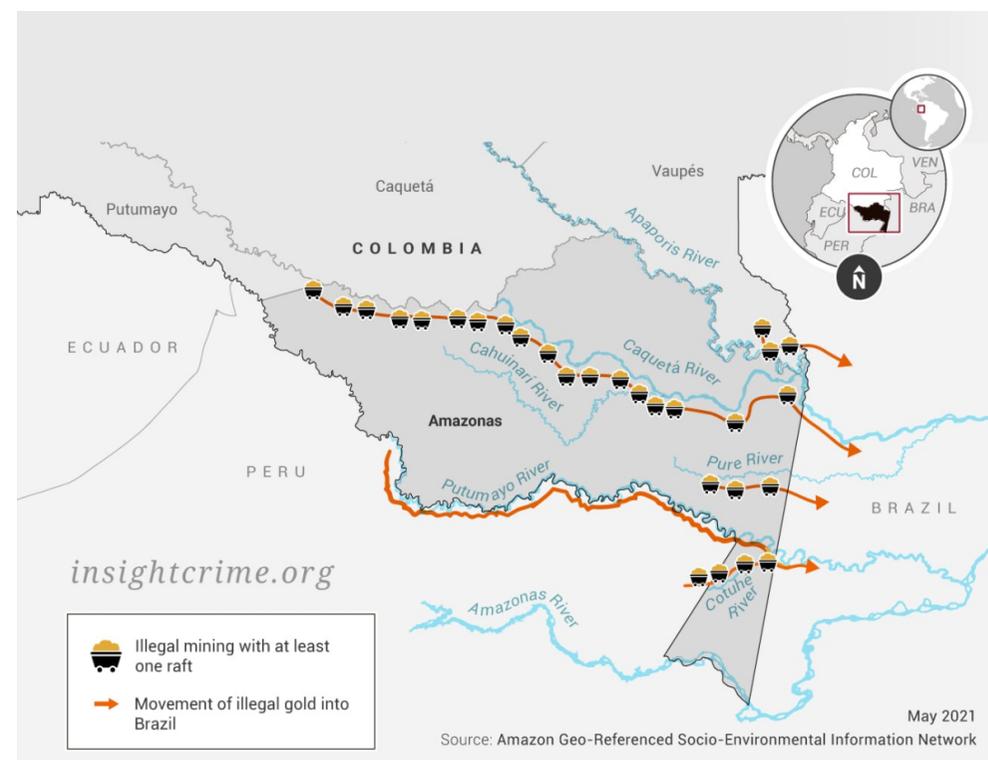
La coca es una planta nativa del Amazonas con numerosos usos tradicionales y una importancia cultural significativa para los pueblos indígenas. La demanda mundial de cocaína se disparó durante las décadas de 1980 y 1990, lo que convirtió al tráfico de drogas en uno de los principales impulsores del conflicto en Colombia. A pesar de que no es uno de los centros productores de coca más fuertes del país, el sur del departamento del Amazonas, en la región de la triple frontera donde convergen Brasil, Colombia y Perú, mantiene su posición histórica como corredor de tránsito para la cocaína (InSight Crime 08/08/2023). Si bien Colombia es uno de los principales productores de coca, también se observan importantes actividades de cultivo en la región amazónica de Perú. En los últimos años, el cultivo y el procesamiento de coca han aumentado y se han solidificado a lo largo de la frontera con Perú. Según la ONG ambiental peruana Pro-Purús, a mediados de 2023 había 85 pistas de aterrizaje clandestinas en la selva central del Perú, lo que indica la expansión de la zona de cultivo de coca, particularmente notable en 2020 durante la pandemia de COVID-19 (Propurus 17/08/2023; GI-TOC et al. 03/11/2023).

Los cientos de ríos y las pistas de aterrizaje clandestinas diseminados por toda la región brindan amplias oportunidades para el tráfico. Los grupos armados no estatales utilizan varios puertos marítimos de Brasil, así como de Guyana y Suriname, para exportar la mayor parte de la cocaína a Europa y África occidental (GI-TOC et al. 03/11/2023). Un estudio de la UNODC de 2023 destacó los vínculos entre la corrupción, la violencia y la reinversión del dinero del narcotráfico en otras industrias, a veces legales, que causan daños ambientales, como la ganadería y la agricultura. Si bien el tráfico de cocaína domina el tráfico de drogas en la región, el tráfico de cannabis también está presente (UNODC 2023).

Minería ilegal

En el río Puré, en 2022, el número de balsas mineras aumentó en más del 1.000% en comparación con 2020, cuando se reportaron 25 (EE 09/04/2023). La minería ilegal ha sido una fuente de ingresos clave para los grupos armados no estatales en Colombia desde finales de la década de 1990. En la década siguiente, mientras el Gobierno promovía ofertas mineras para grandes empresas, la minería ilegal por parte de grupos armados creció exponencialmente, acompañada de violencia y daños ambientales. Desde entonces, la extracción ilegal de minerales, en particular de oro, se ha seguido expandiendo por todo el país. Durante la pandemia, cuando se cerraron las fronteras del país, la presencia de la minería ilegal entre Colombia y Brasil se extendió varios kilómetros (InSight Crime 08/09/2021).

Mapa 3. Rutas mineras ilegales en el departamento del Amazonas



Fuente: InSight Crime (08/09/2021)

Así como otras economías ilegales, la extracción de oro en la Amazonía sigue ciclos de auge económico. El alto valor de mercado del mineral en los mercados nacionales e internacionales, agravado por la inestabilidad económica resultante de la pandemia, está provocando un aumento continuo de las operaciones mineras en los ríos Caquetá, Puré, Cahuinari, Putumayo y Cotuhé. La minería en estas áreas surge como un medio de subsistencia para las comunidades periféricas que carecen de otras fuentes de ingresos, como los pueblos indígenas y los agricultores. Los beneficios de la explotación y el transporte de minerales atraen a grupos armados vinculados tanto al conflicto armado como al crimen organizado (DP 26/01/2021).

Los grupos armados participan principalmente en la fase de extracción, durante la cual extorsionan a los pequeños mineros. Cobran por la entrada de maquinaria, mercurio y gasolina a los sitios de minería ilegal. En algunos casos, los mineros pagan impuestos fijos

solo para operar en un territorio bajo el control de un grupo específico. En otros casos, los grupos añaden un porcentaje a esta tarifa fija por cada pieza de maquinaria introducida. Estos impuestos se pueden pagar en oro en lugar de en efectivo (InSight Crime 08/09/2021).

Deforestación y degradación ambiental

El departamento del Amazonas ha registrado un aumento en la devastación de bosques y el despeje de tierras en medio de los continuos disturbios en el campo. La tasa de pérdida de árboles está vinculada a los conflictos y la violencia. Estos vínculos son complejos. La deforestación comenzó a aumentar poco después de que las FARC-EP, que habían operado principalmente desde áreas rurales, abandonaran el territorio. En las áreas donde operaba, el grupo tendía a restringir la deforestación. La salida del grupo armado del territorio permitió que otros grupos armados no estatales y grupos transnacionales de crimen organizado tomaran el control. Dado que la autoridad estatal en el campo seguía siendo débil, estos grupos se retiraron a los bosques para expandir actividades como el cultivo de coca, la ganadería, la extracción ilegal de oro y la tala, a veces trabajando con empresas legales (ICG 04/11/2021). La deforestación aumentó significativamente, impulsada o apoyada por grupos armados tanto emergentes como establecidos, que con frecuencia participaban en una feroz competencia entre sí.

Muchos desplazados internos (IDP por su sigla en inglés) y personas afectadas por el conflicto se enfrentan a una pobreza extrema y recurren al despeje forestal en busca de medios de subsistencia (DP 26/01/2021). Estos medios de subsistencia incluyen la ganadería y la agricultura, la tala comercial, el desarrollo de infraestructuras y los monocultivos (EIA 26/06/2019). La ganadería se perfila como el principal impulsor de la deforestación (KII 29/09/2023). A pesar de formar parte de las cadenas de suministro legales, ha llegado a superar el cultivo de coca, la tala ilícita y la extracción ilegal de oro como causante de la pérdida de árboles. Si bien la ganadería es aparentemente un negocio legítimo, está relacionada con prácticas corruptas y delictivas que aceleran la deforestación. Frecuentemente, las tierras obtenidas ilegalmente para el pastoreo suelen estar en áreas ambientalmente protegidas (ICG 04/11/2021).

El reciente aumento de la ganadería se ha convertido en un tema sin resolver, alimentado por políticos y empresarios influyentes (KII 29/09/2023). Si bien la degradación del suelo y el medio ambiente hace que la región no sea apta para la ganadería, la práctica tiene tradiciones muy arraigadas y sustenta los medios de vida de numerosos agricultores (Cambio, consultado el 08/02/2024). Los críticos sostienen que el estado ha permitido históricamente la cría de ganado en áreas ambientalmente protegidas (KII 12/12/2023). El pastoreo de ganado se observa incluso en los parques nacionales, donde es ilegal. La opacidad de la cadena de suministro bovina facilita el lavado de ganado criado ilegalmente. Para eludir las regulaciones, las vacas de los parques nacionales, para las que no se puede obtener la certificación requerida, se

integran en la cadena de suministro legal. La falta de trazabilidad contribuye a la financiación de los grupos armados. Incluso hay denuncias de tráfico de ganado desde Venezuela, donde es más barato y desde donde se traslada a parques nacionales y reservas forestales de Colombia (ICG 04/11/2021; Mongabay 27/05/2021).

Detrás de la deforestación, hay dinámicas que van mucho más allá de la venta de madera o la participación en el tráfico de drogas. Si bien la deforestación puede ocurrir por la venta ilícita de madera o el cultivo de coca, en última instancia, la tala y la quema de vastas hectáreas de bosque amazónico se llevan a cabo para apoderarse ilegalmente de tierras nacionales e introducirlas en el mercado de tierras (Cambio consultado el 08/02/2024).

La deforestación incrementa la susceptibilidad del país al cambio climático al aumentar la exposición al impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. Con la pérdida de árboles, los ecosistemas del país se han vuelto menos resistentes al estrés climático, como las sequías estacionales asociadas con El Niño o a desafíos como la sedimentación de los ríos. La degradación del suelo empeora las consecuencias de las inundaciones y sequías inducidas por el cambio climático, junto con los desastres relacionados, como los deslizamientos de tierra (EIA 26/06/2019). El despeje de tierras, en gran medida no regulado, sirve como vía para que los grupos armados y delictivos acumulen riqueza y extiendan su influencia a áreas remotas, lo que representa una amenaza significativa (ICG 04/11/2021).

FACTORES AGRAVANTES

Infraestructura deficiente

El Amazonas es el departamento más grande de Colombia y, debido a sus densas condiciones de selva, su población dispersa y su difícil acceso, incluso a través de vías fluviales, se considera en gran medida un territorio remoto (USAID/IMMAP 09/09/2021). Los ríos, largos y caudalosos afluentes del río Amazonas, atraviesan el territorio, junto con numerosas lagunas y áreas pantanosas, y constituyen una extensa llanura con varios rasgos de bajo relieve. Estos factores han llevado a la concentración de las instituciones en los municipios de Leticia y Puerto Nariño. Leticia es la capital del departamento, mientras que Puerto Nariño funciona como un centro de comercio y turismo. En consecuencia, esto ha dado lugar a grandes extensiones territoriales completamente desprovistas de atención estatal. En las ANMs, estas variables se replican: vastos territorios de difícil acceso, infraestructura precaria, asentamientos humanos aislados y una presencia institucional débil o limitada (DP 26/01/2021; OCHA 05/06/2020). Las condiciones del territorio y la precaria infraestructura crean dificultades para la cobertura de los servicios básicos para la población y plantean desafíos para el acceso humanitario.

Impacto del cambio climático

Como resultado del cambio climático, se prevé que la región experimente lluvias más extremas que provoquen inundaciones, deslizamientos de tierra y erosión de la tierra. También se prevé que el aumento de las estaciones cálidas incremente el riesgo de incendios forestales, con graves consecuencias ecológicas y de salud (WB 05/07/2021). Los fenómenos de variabilidad climática, como El Niño y La Niña, contribuyen al aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías, las inundaciones, las olas de calor y los incendios forestales en Colombia. El Niño, que comenzó en junio de 2023 y se espera que dure hasta abril de 2024, se asocia con condiciones inusualmente secas, una mayor variabilidad de las precipitaciones y temperaturas anormalmente altas en un gran número de sectores del país (IRI consultado 22/01/2024; IDEAM 19/02/2024; NOAA 05/02/2024). En febrero de 2024, el Gobierno colombiano destacó el creciente riesgo de olas de calor e incendios forestales en la región amazónica. Advirtió sobre un potencial sin precedentes de incendios en la zona. El Gobierno activó los protocolos internacionales para fomentar la cooperación y mejorar las capacidades de extinción de incendios aéreos (MADS 28/01/2024; Mongabay 26/01/2024; Semana 27/01/2024).

Dinámicas regionales

En medio de los bosques y la vasta geografía, las fronteras nacionales no siempre tienen importancia para las personas que habitan el territorio, incluidos los grupos armados no estatales (InSight Crime 08/08/2023). El departamento del Amazonas, que comparte fronteras con Brasil y Perú, es vulnerable a las dinámicas que ocurren en los municipios vecinos de estos países. La fluidez del movimiento a través de estas fronteras porosas puede incrementar los desafíos, ya que las dinámicas regionales interconectadas trascienden las restricciones geopolíticas, afectan a la población local y contribuyen a la complejidad de la situación en la región amazónica. Las repercusiones de las acciones de los grupos transnacionales de crimen organizado de Brasil, Perú y Venezuela complican aún más el panorama de la seguridad (Amazon Underworld, consultado el 29/01/2024). El desarrollo y el fortalecimiento de estos grupos pueden tener consecuencias para la población del departamento.

Limitaciones al acceso humanitario

En la Amazonía, la infraestructura de transporte es insuficiente, en particular en términos de disponibilidad de carreteras y aeropuertos fuera de las capitales departamentales. Esto se atribuye al hecho de que los bosques cubren el 93% de la región, con un 79% designado como reservas indígenas y áreas protegidas (USAID/IMMAP 09/09/2021). Estas características, junto con las grandes distancias y la baja densidad de población, representan desafíos logísticos y dificultan las operaciones humanitarias y gubernamentales. Los incidentes

de violencia armada y los peligros estacionales también dificultan considerablemente el acceso humanitario. Estos sucesos han provocado desplazamientos de población, lo que ha hecho que sea difícil llegar a quienes necesitan asistencia humanitaria. La mayoría de las personas desplazadas han informado que solo reciben atención médica (OCHA 09/01/2024). En las ANMs, la ausencia general de instituciones estatales y humanitarias es generalizada, y se atribuye principalmente al acceso territorial restringido y a la baja densidad de población (OCHA 26/10/2023; ACH et al. 01/07/2022).

IMPACTOS

Impacto en la protección

La crisis ha desatado amenazas de protección que afectan significativamente a las poblaciones amazónicas. Para establecer límites territoriales, los grupos armados no estatales están imponiendo patrones de comportamiento mediante repertorios violentos, que incluyen el reclutamiento, la explotación infantil, la VBG, los homicidios, las amenazas, la extorsión y el desplazamiento forzado (OCHA 09/01/2024; DP 11/05/2023). En este contexto, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de explotación sexual (DP 26/01/2021). El territorio amazónico, donde convergen los conflictos armados y los peligros naturales, es testigo de una alarmante confluencia de riesgos para las comunidades indígenas, los migrantes, los niños, las comunidades rurales y los defensores del medio ambiente (ACH et al. 01/07/2022).

Niños. Múltiples testimonios y alertas denuncian el aumento del reclutamiento de niños por parte de los grupos armados (KII 12/12/2023; KII 22/11/2023; Infobae 23/05/2023). La cobertura educativa por debajo del promedio, las tasas de ausentismo en la escuela secundaria y un alto índice de pobreza multidimensional aumentan el riesgo de reclutamiento, uso y explotación de niños en la Amazonía. También hay un importante subregistro de este fenómeno debido al miedo a las represalias, la falta de conciencia o el acceso limitado a la información sobre las vías de orientación, apoyo y protección existentes. El riesgo de reclutamiento y explotación sexual o económica de niños en el contexto de la minería ilegal y el crimen transnacional es significativo (DP 26/01/2021; OCHA 20/06/2023). La OIT clasifica cualquier trabajo que exponga a los niños al abuso sexual (físico o psicológico) como una de las peores formas de trabajo infantil y, como tal, debe prohibirse por el Convenio No. 182 de la OIT (OIT consultado el 29/01/2024).

Las comunidades indígenas, en particular las comunidades PIA Yuri Passé, se enfrentan a riesgos cada vez mayores debido a la invasión de mineros ilegales y diferentes grupos armados. Los grupos armados prefieren atravesar las áreas de grupos indígenas aislados para evitar ser vistos por las fuerzas armadas colombianas (KII 06/12/2023; Mongabay 01/11/2023).

Guardabosques. En los parques nacionales, vitales para la conservación de la biodiversidad, están aumentando las amenazas contra los guardaparques (KII 06/12/2023). Los incidentes reportados entre 2019 y 2023 revelan un patrón preocupante, ya que los funcionarios de los parques se enfrentan a amenazas explícitas, prohibiciones de acceso ocasionadas por acciones militares y desplazamientos, que afectan particularmente a los parques de la Sierra de la Macarena, Serranía del Chiribiquete, Tinigua y La Paya (Cuestión Pública 18/10/2023; Mongabay 17/10/2023).

Defensores ambientales. Colombia se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente y del territorio. Durante la última década, al menos 382 defensores del medio ambiente han sido asesinados en el país, 159 de los cuales eran indígenas (Mongabay 01/11/2023). Los incidentes reportados incluyen amenazas, saqueos y robos en los puestos de control, lo que evidencia los continuos desafíos para proteger estas áreas (Cuestión Pública 18/10/2023). Los actos de violencia contra los defensores no se investigan adecuadamente, lo que a menudo conduce a la impunidad (GI-TOC et al. 03/11/2023).

Impacto en los medios de vida, la disponibilidad de alimentos nutritivos y el acceso al agua en la Amazonía

La situación actual en el departamento del Amazonas ha provocado una serie de impactos devastadores en los fundamentos mismos de la vida en la región, afectando las fuentes de suelo y agua y comprometiendo la disponibilidad de alimentos nutritivos, agua limpia y medios de vida (ACH 24/12/2023). Actividades como la ganadería han ejercido presión sobre el suelo y han compactado la tierra, dejándola inutilizable y provocando la deforestación. Además de la deforestación, las consecuencias de la expansión de la ganadería en áreas inadecuadas para el pastoreo incluyen el aumento de las emisiones de CO₂ y una rápida pérdida de fertilidad del suelo (Cambio consultado el 08/02/2024).

La contaminación de fuentes de agua vitales como resultado de la minería ilegal ha causado una serie de problemas, desde la escasez de agua potable hasta la disminución de la disponibilidad de los recursos pesqueros. Las alertas de escasez de agua potable han aumentado desde octubre de 2023, y la cobertura actual es insuficiente para satisfacer las necesidades de los residentes (3iSolution/iMMAP 04/01/2024; Gobernación del Amazonas 2019).

En 2023, la estación seca en la región amazónica se extendió hasta octubre y afectó los caudales de los ríos Amazonas y Putumayo. La disminución de las precipitaciones provocada por El Niño ha tenido los siguientes resultados.

- Afectó al 61% de la población de las comunidades rurales e indígenas, para quienes el agua de lluvia es la principal fuente de agua en sus hogares. Esto también se debe a la falta de un sistema de suministro de agua u otros sistemas de suministro rural. En particular, 7200 personas de comunidades indígenas se quedaron sin acceso a los servicios esenciales (OCHA 26/10/2023).

- Afectó los cultivos transitorios y las frutas silvestres, la base de la agricultura de subsistencia. Este es un factor de inseguridad alimentaria. En el departamento, el 59% de los hogares se enfrentaron a la inseguridad alimentaria (OCHA 26/10/2023).
- El caudal de los ríos disminuyó, lo que llevó a una reducción del 60% en el transporte fluvial, aumentó los costos de los alimentos y redujo la variedad, en especial en municipios como Leticia y Puerto Nariño, donde vive el 50,4% de la población del departamento (OCHA 26/10/2023).
- Redujo la disponibilidad de recursos pesqueros, que representan el 78% de los ingresos familiares y el 81% de su ingesta de proteínas. Esto ha tenido un impacto significativo en los medios de vida (OCHA 24/11/2023).

La presencia de grupos armados aumenta la inseguridad alimentaria de las comunidades indígenas, ya que su percepción de la selva y los ríos como espacios inseguros conduce a la reducción de las actividades de recolección, caza y pesca esenciales para su supervivencia (ACH et al. 01/07/2022).

Impacto en la salud

Sistema de salud débil. Históricamente, el sistema de salud de la Amazonía se ha enfrentado a grandes desafíos. Para diciembre de 2021, el departamento del Amazonas tenía un porcentaje significativamente menor de instituciones de servicios de salud (1%) y transportistas médicos (0,0012%) que otros departamentos del país (MSPS 2021). Las deficiencias en la cadena de frío de los centros de salud, la falta de electricidad y el suministro insuficiente de medicamentos impiden una planificación y una cobertura de salud adecuadas. Solo dos de los seis departamentos de la región amazónica (Caquetá y Putumayo) tienen capacidades de atención médica que superan el segundo nivel, que abarca pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía. En septiembre de 2023, solo había cinco proveedores de servicios de salud indígenas que cubrían 115 comunidades en toda Colombia. Este número es insuficiente para los casi dos millones de personas indígenas que residen en reservas en todo el país, según el DANE (La Silla Vacía 17/09/2023). Las barreras geográficas, como la distancia, el transporte inadecuado y el aislamiento estacional, dificultan la atención médica continua (ACH 24/12/2023). Las instalaciones carecen de la infraestructura (equipo médico), en particular en las ANMs, donde las comunidades dispersas no tienen acceso a servicios de salud esenciales (KII 27/12/2023). El transporte al proveedor de atención médica más cercano es costoso y requiere mucho tiempo, a veces días (Gobernación del Amazonas 2019).

La violencia asociada con las economías ilegales y los grupos armados ha llevado a parte del personal de salud a abandonar las instalaciones médicas, dejando a las personas sin atención médica (MSF 26/07/2023). Las comunidades indígenas aisladas corren un riesgo

especial y, en muchos casos, esta situación puede provocar la muerte de las personas afectadas. No hay registros oficiales sobre esta situación (KII 22/11/2023).

Una consecuencia particular recae sobre las mujeres, que se enfrentan a desafíos en el manejo de la menstruación como resultado de la escasez de recursos y la falta de acceso a productos sanitarios asequibles. Las toallas higiénicas son costosas y, en algunos casos, las niñas y las mujeres recurren a métodos como el uso de paños, cuyo proceso de desinfección no siempre está garantizado, lo que puede generar problemas de higiene y riesgos para la salud (OCHA 15/01/2024).

Contaminación del agua. Las economías ilegales como la extracción de oro y la producción de cocaína contribuyen a la contaminación del suelo y el agua debido a la descarga de los productos químicos que utilizan en su producción. La contaminación de los ríos y otras fuentes de agua afecta lo que consumen las personas y provoca problemas de salud, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas que afectan principalmente a los niños (KII 23/01/2024; KII 29/09/2023; SINCHI consultado el 02/01/2023; Gobernación del Amazonas 2019). La degradación ambiental causada por la minería también ha dejado el suelo lleno de agujeros que contienen agua de lluvia, lo que crea las condiciones ideales para la reproducción de mosquitos. Como resultado, la malaria y el dengue se han convertido en problemas de salud crecientes en la región (KII 06/12/2023; KII 22/11/2023; ConsultorSalud 26/07/2023).

La minería ilegal en la Amazonía amenaza el medio ambiente al alterar el caudal de los ríos e introducir mercurio tóxico en el ecosistema (KII 12/12/2023; InfoAmazonia 03/08/2023). El mercurio envenena las vías fluviales locales y es absorbido por las plantas y consumido por los animales, lo que afecta no solo a las comunidades que dependen de estos recursos, sino también a las de regiones más distantes, como los PIA (PNNC 2018). La contaminación por mercurio tiene graves consecuencias para el cuerpo humano y provoca diversos síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, trastornos neuromusculares, dolores de cabeza y disfunción cognitiva y motora (GI-TOC et al. 03/11/2023). En las mujeres embarazadas, el mercurio puede atravesar la placenta y afectar el desarrollo del cerebro fetal.

Desnutrición. Las actividades de los grupos armados, junto con la contaminación, han ahuyentado a los animales que antes eran cazados para obtener sustento, lo que ha puesto en peligro la capacidad de la población local para alimentarse por sí misma (KII 12/12/2023). En el departamento del Amazonas, los casos de desnutrición en 2019 fueron más prevalentes entre los niños menores de 12 meses, que representaron el 50% del total. Le siguieron los niños de 12 a 24 meses, con un 42%, y los mayores de 24 meses, con un 8%. Al considerar a toda la población de niños menores de 5 años, se observa desnutrición crónica, en particular en las comunidades indígenas. Esto se atribuye a factores como el bajo peso al nacer, la desnutrición aguda y la deficiencia de yodo. En particular, la deficiencia de yodo, causada específicamente por la minería ilegal, puede provocar anomalías neurológicas en los bebés (Eslava-Schmalbach and Eslava-González 30/12/2020; Gobernación del Amazonas 2019).

Suicidio. En Colombia, los departamentos del Amazonas, Guainía y Vaupés comparten las tasas de suicidio más altas. Si bien se desconoce el porcentaje exacto de casos de subregistro, se debe actuar con cautela al interpretar las cifras, ya que se cree que los suicidios indígenas en el departamento del Amazonas no se reportan de manera significativa. Para dar contexto, si bien la tasa nacional de suicidios es de 5 suicidios por cada 100 000 habitantes, la Amazonía casi quintuplicó esa cifra en 2020, pues se registró una tasa de 23,6. Estas cifras podrían ser incluso más alarmantes de lo que se sugiere (La Silla Vacía 17/09/2023). El reclutamiento por parte de grupos armados es un factor asociado con el suicidio en las comunidades indígenas. La mayoría de los suicidios se producen entre hombres de 19 a 30 años, una tendencia que puede estar relacionada con la elaboración de perfiles y los ataques de los grupos armados contra este grupo demográfico (OPIAC 30/03/2023). Los expertos atribuyen este fenómeno, entre otros factores, a la destrucción de los hábitats naturales de las comunidades, como los sitios sagrados, al abuso de alcohol y sustancias, y a lo que algunos describen como desapego y aculturación, una degradación de las tradiciones y la identidad indígenas (KII 27/12/2023; La Silla Vacía 17/09/2023).

SITUACIÓN HUMANITARIA EN CADA EJE TERRITORIAL

Comprender la región amazónica en los distintos ejes territoriales es crucial. Su enorme tamaño y los diferentes desafíos a los que se enfrentan las comunidades que la integran exigen un enfoque matizado que se fundamente en una comprensión profunda de las crisis particulares de cada área remota (KII 06/12/2023).

Eje Caquetá

En el eje del Caquetá, los rápidos representan un desafío para la navegación fluvial, ya que restringen el transporte de grandes mercancías y limitan la movilidad. El tráfico de drogas y las actividades mineras prevalecen aquí, e implican el movimiento de personas y productos de Colombia a Brasil. Están surgiendo alianzas entre traficantes y mineros, una dinámica diferente a la del pasado. El cambio climático y El Niño han reducido las poblaciones de peces en el río Caquetá, lo que afecta los medios de vida locales. Las condiciones de sequía también han aumentado la prevalencia de enfermedades como la malaria y el dengue pues se crean zonas de reproducción en piscinas naturales y artificiales (KII 06/12/2023).(KII 06/12/2023).

Las ANMs en el eje norte del Caquetá incluyen La Pedrera, La Victoria, Mirití-Paraná y Puerto Santander. En julio de 2022, según las cifras más recientes disponibles, era claro que los desafíos para acceder al territorio y la baja densidad de población significaban que no quedaba presencia institucional en La Victoria. La Pedrera comparte frontera con Brasil,

lo que la convierte en un corredor crucial para el tránsito de las operaciones de grupos armados no estatales y de crimen transnacional (DP 11/05/2023). En julio de 2022, solo había un puesto de salud que brindaba atención básica en La Pedrera. En Mirití-Paraná, la presencia institucional incluyó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con un enfoque en la identificación de casos de desnutrición infantil. En Puerto Santander, los líderes indígenas se enfrentan a amenazas cada vez mayores (ACH et al. 01/07/2022).

En mayo de 2023, estas ANMs reportaron casos de desplazamiento forzado; reclutamiento de menores por grupos armados; explotación de niños y adolescentes; y homicidios, extorsiones y amenazas como prácticas de control social. Los niños y adolescentes son reclutados y explotados para operaciones de tráfico de armas y drogas, y trabajan como transportistas de cocaína (DP 11/05/2023).

Eje Putumayo

El eje del Putumayo, donde viven las comunidades PIA Yurí Passé, se caracteriza por una presencia significativa de grupos armados que transitan por los departamentos del Putumayo y Amazonas que utilizan el río Putumayo como principal ruta de transporte (ACH et al. 01/07/2022). La condición transfronteriza del eje del Putumayo y el hecho de que los cultivos de coca en el lado peruano sean abundantes hacen que la situación sea más difícil (Cerosetenta 21/12/2022; Ojo Público 04/09/2022). El eje del Putumayo se distingue por su extenso cultivo de coca y su tala legal e ilegal. Estas actividades han generado diversos riesgos de protección como las amenazas a los líderes comunitarios, el reclutamiento y la extorsión (KII 12/12/2023; KII 06/12/2023). La contaminación por mercurio en los ríos también está afectando la salud y los medios de vida de los pueblos indígenas.

El eje Putumayo abarca varias ANMs en el departamento de Amazonas como El Encanto, La Chorrera, partes de La Pedrera, Puerto Alegría, Puerto Arica y Tarapacá.

- En Puerto Alegría y El Encanto, la presencia de grupos armados no estatales ha provocado varios incidentes de protección. En ambos lugares, las actividades de los grupos armados no estatales han obligado a las familias a trasladarse, lo que ha alterado las estructuras y los medios de subsistencia de la comunidad. Los maestros de Puerto Alegría y El Encanto se enfrentan a amenazas cada vez mayores, lo que socava la estabilidad educativa en las comunidades. La presencia de grupos armados no estatales a lo largo del río Putumayo también restringe la circulación, lo que afecta particularmente a Puerto Alegría y El Encanto. Estas restricciones limitan el acceso a los recursos esenciales y dificultan las actividades diarias (ACH et al. 01/07/2022).
- En Puerto Arica, la infraestructura educativa está en condiciones precarias. Los centros de salud son inadecuados, hay falta de agua potable y la movilidad es limitada. Estas condiciones socavan el bienestar de la comunidad y aumentan la vulnerabilidad de la

población más joven al reclutamiento y la explotación por parte de grupos armados no estatales (ACH et al. 01/07/2022).

- El Parque Nacional Natural Río Puré, que limita con Brasil por el oriente, también alberga PIA que enfrentan amenazas de grupos armados no estatales que utilizan rutas cercanas para evitar las bases militares próximas a la frontera con Brasil (KII 06/12/2023). El río Puré se utiliza para el tráfico de drogas y hay una presencia creciente de actividades mineras originarias de Brasil. Estos desarrollos tienen repercusiones humanitarias significativas como el desplazamiento, el acceso restringido a los recursos y una mayor vulnerabilidad a las influencias externas, todo lo cual amenaza los estilos de vida tradicionales y el bienestar de estas comunidades aisladas (ACT 17/06/2021). Según la UNODC, el río Puré corre un alto riesgo debido a la explotación de oro en el agua, a pesar de que es un área protegida por la presencia de PIA (UNODC 09/06/2022).

Eje Amazonas

Leticia y Puerto Nariño son los dos municipios principales que forman el eje del Amazonas, y Leticia es la capital del departamento. En consecuencia, estos municipios son los puntos focales de la presencia institucional (DP 26/01/2021).

En el eje del Amazonas, la crisis humanitaria está vinculada a varios factores.

- El caudal del río Amazonas ha disminuido como resultado de El Niño, lo que ha afectado tanto la movilidad como los precios de los alimentos. El agua potable ha resultado insuficiente para el desarrollo de las actividades básicas, lo que reduce la producción de alimentos para el consumo y para la comercialización.
- El eje se enfrenta a importantes amenazas de protección, como el reclutamiento de niños y los asesinatos selectivos (KII 06/12/2023).